



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 30 de Septiembre de 2020

Auto Interlocutorio No. 82

**MAGISTRADO PONENTE: ÓSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT**

ACCIÓN:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
EXPEDIENTE:	76001-33-33-002-2017-00174-01
DEMANDANTE:	OLIVER MURILLO URRUTIA
DEMANDADO:	UGPP
ASUNTO	REVOCA AUTO QUE NIEGA LLAMAMIENTO EN GARANTIA

**I. OBJETO DE LA DECISION**

Procede esta Corporación en sala jurisdiccional de decisión unitaria a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada UGPP, contra el auto interlocutorio No. 1309 del 04 de junio de 2019, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cali, que rechazó el llamamiento en garantía formulado por la entidad demandada.

**II. ANTECEDENTES**

**2.1 Pretensiones**

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA y actuando a través de apoderado judicial, el señor Oliver Murillo Urrutia demandó a la UGPP y solicitó<sup>1</sup> que se reliquide y pague la pensión por considerar que no se ha dado aplicación integra a la ley 33 de 1985, artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y por considerar que le asiste el derecho a incluir nuevos factores salariales como viáticos permanentes y prima especial de recreación.

**2.2 Del auto apelado**

Con la contestación de la demanda la UGPP solicitó que se vinculara en calidad de llamado en garantía al Ministerio de la Protección Social (Departamento administrativo de Salud de Chocó), como quiera que esta fue la entidad empleadora de la demandante.

El Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cali, mediante auto interlocutorio No. 1309 del 04 de junio de 2019, rechazó el llamamiento en garantía formulado

<sup>1</sup> Ver folios 1-6

por el apoderado judicial de la UNIDAD ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - UGPP, al considerar que no es posible inferir la existencia de un vínculo legal ni contractual, por el cual sea necesario llamar en garantía al Ministerio de la Protección Social (Departamento administrativo de Salud de Chocó), como responsable de los perjuicios que se le puedan ocasionar a la demandada en caso de que se profiera un fallo condenatorio.

### **2.3 Fundamentos del recurso de apelación**

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandada UGPP, interpone recurso de apelación contra el auto interlocutorio del 04 de junio de 2019, aduciendo que:

“(…)

*(…) es indispensable porque los actos o actuaciones del empleador son fundamentales para la expedición de los actos administrativos, ya que él suministra la materia prima el cual vienen a ser los aportes, y sobre esos aportes es que CAJANAL EICE EXTINTA HOY UGPP hace los reconocimientos pensionales. No hay pues como establecer la obligación de responder por la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer la UNIDAD ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES UGPP respecto del MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ - (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL CHOCÓ) MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL como resultado de la sentencia”*

## **III. CONSIDERACIONES**

### **3.1. Procedencia del recurso**

Esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 153 y 243 numeral 7 del CPACA.

### **3.2. Problema jurídico**

Teniendo en cuenta la decisión adoptada en primera instancia, y atendiendo las competencias legalmente atribuidas a esta Corporación, el problema jurídico consiste en determinar si resulta procedente la solicitud de llamamiento en



garantía presentada por la UGPP y en consecuencia debe revocarse el auto recurrido?.

### 3.3. Caso Concreto

En el presente asunto el señor Oliver Murillo Urrutia a través de apoderado judicial, presentó demanda contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - UGPP en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declare la nulidad del acto administrativo por medio del cual CAJANAL (hoy UGPP), ordenó pagar la pensión de jubilación a su favor, sin la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados al momento de adquirir el estatus de pensionado. Así mismo para que se declare la nulidad parcial del acto administrativo a través del cual la UGPP negó la solicitud de reliquidación de la pensión de vejez.

La parte demandada, formuló llamamiento en garantía en contra del *MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ - (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL CHOCÓ) MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL*, señalando lo siguiente:

- Que no está obligada a reconocer o reliquidar pensiones con fundamento en factores salariales frente a los cuales no se realizaron aportes.
- Que como quiera que en este caso el *MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CHOCÓ (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL CHOCÓ)* fueron los empleadores del actor, estas entidades fueron a que determinaron los factores frente a los cuales se realizaban los aportes; decisión frente a la cual no intervino la voluntad de la UGPP.
- Que el *MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL CHOCÓ) MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CHOCÓ* son quienes deben de asumir la responsabilidad en este asunto, por no cotizar los aportes de pensión del actor en debida forma.

El A quo negó el llamamiento en garantía, por considerar que no es posible inferir la existencia de un vínculo legal o contractual que haga responsable a los llamados por los perjuicios que se le puedan ocasionar a la parte demandada en el caso que se profiera un fallo condenatorio.

La parte accionada apela la anterior decisión bajo los siguientes argumentos:



- Que se evidencia la existencia de un derecho legal de la UGPP, (sucesor procesal de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL - CAJANAL EICE), que le permite exigir al *MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CHOCÓ - (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL CHOCÓ)*, la devolución de la eventual condena, toda vez que ésta última en calidad de empleador del actor, al momento de establecer el ingreso base de cotización de los aportes al sistema de seguridad social, debió incluir la totalidad de los factores salariales, tal como se consagra en los artículos 17 y 18 de la Ley 100 de 1993, que disponen que durante la vigencia de la relación laboral o el contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse las cotizaciones obligatorias al régimen de sistema general de pensiones respectivo, por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas, con base en el salario mensual o ingresos por prestación de servicios.
- Que el artículo 53 de la Ley 100 de 1993, consagra amplias facultades de fiscalización en cabeza de las entidades administradoras del régimen solidario de prestación definida, tendientes a hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones de rango legal en relación con el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social.
- Que el Sistema de Seguridad Social encuentra su sustento en la relación tripartita existente entre el empleado, empleador y entidad administradora de pensiones, basado en los principios de eficacia y solidaridad, pues cuando una de las partes no cumple con los requisitos o exigencias legales, puede dificultar o afectar el acceso a la pensión de vejez.

Que por lo expuesto, resulta procedente el llamamiento en garantía, por la existencia de un vínculo legal entre la UGPP, como entidad administradora de pensiones, y el *MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL CHOCÓ) MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CHOCÓ*, en calidad de empleadores del actor.

Al respecto, el Despacho comparte los argumentos expuestos por la parte recurrente, pues el llamamiento deprecado tiene como finalidad que al interior del proceso se establezca la responsabilidad directa o indirecta de los empleadores *MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL CHOCÓ) MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – SECRETARIA DE SALUD*



**DEPARTAMENTAL DEL CHOCÓ** con fundamento en el deber legal que les asiste frente a los aportes de su trabajador.

El llamamiento en garantía es una figura procesal que se fundamenta en la existencia de un derecho legal o contractual, que vincula a llamante y llamado y permite traer a éste como tercero, para que haga parte de un proceso, con el propósito de exigirle la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir el llamante, producto de la sentencia.

Se trata de una relación de carácter sustancial que vincula al tercero citado con la parte principal que lo cita y según la cual aquél debe responder por la obligación que surja en virtud de una eventual condena en contra del llamante.

El objeto del llamamiento en garantía es:

*"(...) que el tercero llamado en garantía se convierta en parte del proceso, a fin de que haga valer dentro del mismo proceso su defensa acerca de las relaciones legales o contractuales que lo obligan a indemnizar o a rembolsar, y al igual del denunciado en el pleito, acude no solamente para auxiliar al denunciante, sino para defenderse de la obligación legal de saneamiento."<sup>2</sup>*

El llamamiento en garantía en materia contenciosa administrativa está regulado en norma especial, bajo los supuestos del artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que expresamente dice:

**"Artículo 225.** Llamamiento en garantía. Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.

Ahora, el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) estableció en el artículo 64 la figura del llamamiento en garantía, incluyendo en su redacción los artículos 54 y 57 del C.P.C., pues conserva la noción de la ya derogada denuncia del pleito.

Dicha disposición es del siguiente tenor:

**"Artículo 64. Llamamiento en garantía. Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación."**

---

<sup>2</sup> MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Editorial ABC, undécima edición, pág. 258. Bogotá. 1991.

Por su parte, el artículo 65 ibídem señala que la demanda por medio de la cual se llame en garantía deberá cumplir con los mismos requisitos exigidos en el artículo 82 de dicho Código, los cuales son:

**“Artículo 82. (...)**

1. La designación del juez a quien se dirija.
2. El nombre y domicilio de las partes y, si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales. Se deberá indicar el número de identificación del demandante y de su representante y el de los demandados si se conoce. Tratándose de personas jurídicas o de patrimonios autónomos será el número de identificación tributaria (NIT).
3. El nombre del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso.
4. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad.
5. Los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.
6. La petición de las pruebas que se pretenda hacer valer, con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder, para que éste los aporte.
7. El juramento estimatorio, cuando sea necesario.
8. Los fundamentos de derecho.
9. La cuantía del proceso, cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite.
10. El lugar, la dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar, donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibirán notificaciones personales.
11. Los demás que exija la ley”.

Bajo la anterior perspectiva, resulta claro entonces que en los asuntos contencioso administrativos, es procedente el llamamiento en garantía, bajo los parámetros establecidos en el artículo 225 del CPACA, el cual contiene los requisitos del escrito de llamamiento, en el que se concreta entre otros, la indicación de los hechos en que se fundamenta y los fundamentos de derecho que se invoquen.

Frente a la naturaleza jurídica y la finalidad del llamamiento en garantía, el Consejo de Estado mediante auto de fecha 09 de junio de 2015, radicado No. 53062, con ponencia de la Consejera STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO señaló lo siguiente:

*“El llamamiento en garantía ha sido instituido, en aras del principio de economía procesal, pues da lugar a que en un mismo juicio se resuelva, además, de la controversia principal, el llamado derecho de “reversión”. Dicha figura procesal requiere como elemento esencial que, por razón de la ley o el contrato, el llamado deba asumir las contingencias o el resultado de una litis que le resulta ajena, salvo en que bien podría resultar comprometido a responder por el daño causado.*

*(...)*

*Como se conoce la figura del llamamiento en garantía es aplicable a ciertos medios de control, para el efecto aquellos en los que se busca una reparación o restablecimiento. (...) El llamamiento en garantía implica una nueva pretensión y una eventual incertidumbre en el resultado del proceso”. (Subraya fuera de texto)*

De otra parte, el Consejo de Estado mediante auto del 08 de febrero de 2016, radicado No. 15001233300020130062001, con ponencia del Consejero

Ponente GERARDO ARENAS MONSALVE, afirmó:

*“En este orden de ideas, considera el Despacho que en el sub judice, como lo señaló el Tribunal, no hay responsabilidad por parte de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- UPTC frente a la obligación de reconocer ciertos factores salariales y reliquidar la pensión reclamada, toda vez que no existe entre llamado y llamante una relación de garantía que le imponga a aquél el deber de responder por las obligaciones a cargo de CAJANAL EICE en liquidación, hoy UGPP.*

*Sumado a lo expuesto, se aclara que CAJANAL EICE en liquidación fue quien emitió los actos administrativos aquí acusados, de tal forma que de llegarse a ordenar en la sentencia del proceso el pago de lo pretendido, deberá responder por lo que se le reconozca y adeuda al demandante.*

*Todo lo anterior, sin perjuicio de que CAJANAL EICE en liquidación, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, pueda ordenar los descuentos por concepto de aportes en seguridad social en pensiones no efectuados durante el tiempo en que el accionante, señor José Miguel Hernández, prestó sus servicios a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- UPTC.*

*Por las razones precedentes se confirmará la decisión apelada y en consecuencia se ordenará al Tribunal que continúe con lo de su cargo.”*

Postura que ha sido reiterada mediante auto del 22 de octubre de 2018, radicación No. 68001-23-33-000-2015-00926-01 (2882-16) Consejero Ponente CESAR PALOMINO CORTES - Actor: NESTOR YESID NIÑO ARIZA - Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL – UGPP, en donde se pronunció de la siguiente manera:

*“Se trata de obligaciones distintas: i) al empleador le corresponde, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, realizar el pago oportuno de los aportes que están a su cargo y de los que están en cabeza del trabajador<sup>3</sup>. Frente al incumplimiento de esta obligación, las entidades administradoras de los diferentes regímenes pueden adelantar las acciones de cobro que correspondan<sup>4</sup>; y, ii) a la entidad administradora le corresponde el reconocimiento y pago de la pensión en aplicación del régimen legal que ampare al servidor público.*

*“(…)*

*La UGPP es quien tiene la obligación de realizar en debida forma el reconocimiento de la pensión, así como su liquidación y asume el pago de los perjuicios derivados de las decisiones pensionales que adopte; por otra parte, la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia como empleador, tiene la obligación de realizar el pago de los aportes respectivos, sin que por ello se pueda señalar que exista vínculo legal para llamarla en garantía para responder por las consecuencias del fallo que se pueda dictar en este proceso en contra de la UGPP si se ordena la reliquidación de la pensión de su afiliado. Lo anterior, sin perjuicio de que la UGPP- pueda iniciar los medios de control a que*

<sup>3</sup> «[...] El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el Gobierno. El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador [...]».

<sup>4</sup> El artículo 24: Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo. (...)”

*haya lugar cuando verifique que existe incumplimiento de las obligaciones del empleador, pues de conformidad con la normativa señalada, la liquidación en la cual se determine el valor adeudado por el empleador, presta mérito ejecutivo, sin que esta situación deba ser resuelta en el presente proceso, toda vez que lo que se discute es la aplicación del régimen de transición por parte de la entidad demandada y no el incumplimiento de la obligación de aportes patronales al régimen pensional<sup>5</sup>. (...)*

No obstante, en la medida en que lo pretendido por la parte demandada es que el **MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL CHOCÓ) MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CHOCÓ** responda por la ausencia de pagos de aportes, al no tener en cuenta todos los factores salariales devengados por el demandante para efectos de cotización, el Despacho se aparta del criterio Superior expuesto<sup>6</sup>, pues considera que existe una relación legal entre los empleadores y las administradoras de pensiones para hacer efectivos los reconocimientos prestacionales de los trabajadores y por su parte entre ellas, la asunción de sus obligaciones (*aportes, cuotas partes pensionales, bonos pensionales, etc.*); lo que a su vez garantiza la estabilidad financiera del sistema de seguridad social en pensiones.

A su vez, el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, consagra las obligaciones legales específicas que se encuentran a cargo de los empleadores, en el siguiente sentido:

**“Artículo 22. Obligaciones del Empleador.** El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el Gobierno.

*El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador.”.*

Entonces, respetuosamente la tesis que prohíbe desatar la responsabilidad de esa relación frente al demandante, en un mismo proceso, se asume contraria a los principios que informan el procedimiento administrativo (concentración y economía procesal) así como el de seguridad social en pensión (garantía del sistema de seguridad social), so pretexto de la inexistencia de una relación de garantía real entre el llamante y el llamado que como viene de verse existe, pues es el empleador<sup>7</sup> quien garantiza tanto a la UGPP como al demandante, el pago de los factores reconocidos y en consecuencia los aportes a pensión

<sup>5</sup> Sentencia de 17 de septiembre de 2015. MP Sandra Lisset Ibarra Vélez. 63001-23-31-000-2010-00141-01

<sup>6</sup> Que no constituye precedente vinculante al no encontrarse unificado.

<sup>7</sup> Reaía desde la ley 6ª de 1945 sobre él la carga de efectuar la provisión de fondos correspondiente para ser trasladados al ISS cuando este asumiera la cobertura del componente pensional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la ley 90 de 1946.



sobre ellos, sin desmedro del sistema.

Desde la Ley 90 de 1946, se instituyó en Colombia el seguro social obligatorio para todos los individuos, nacionales y extranjeros, que prestaran sus servicios a otra persona en virtud de un contrato expreso o presunto de trabajo o aprendizaje y creó para su manejo el Instituto Colombiano de Seguros Sociales.

Este mandato consagró en Colombia un sistema de subrogación de riesgos de origen legal, previsto en el artículo 72 de dicha ley, estableciendo una implementación gradual y progresiva del sistema de seguro social, proponiendo el desmonte de la carga pensional patronal para asumirla el Estado, bajo una condición de contribución y administración tripartita.

Así lo sostuvo la H. Corte Constitucional en Sentencia T-784/10 agregando que *“El sistema de financiación del fondo común para el pago de las pensiones de jubilación fue modificado mediante los decretos 433 de 1971 y 1935 de 1973, por medio de los cuales se exoneró al Estado de los aportes para la financiación de los seguros pensionales, abandonando así el sistema tripartito y radicando únicamente las cotizaciones en cabeza del trabajador y el patrono.”*; de lo que se rescata que existe una relación empleador-empleado y a su vez empleador-sistema de administración de la seguridad social, para el correcto funcionamiento del sistema pensional, que sustenta en todo caso la comparecencia del empleador como nexo o nódulo para la realización del derecho a la garantía de la seguridad social que es por definición principio mínimo laboral de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución.

Por lo anterior, considera el Despacho que debe revocarse la decisión de primera instancia, para en su lugar aceptar el llamamiento en garantía propuesto por la parte demandada, pues se verifica el cumplimiento de los requisitos conforme lo establecido en el artículo 225 CPACA para su procedencia.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO.- REVOCAR** el auto Interlocutorio No. 1309 del 04 de junio de 2019, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cali, que rechazó el llamamiento en garantía formulado por la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP** contra **MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL CHOCÓ) MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CHOCÓ**, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.



**SEGUNDO.- ACEPTAR** el llamamiento en garantía solicitado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP para su vinculación al proceso del **MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL CHOCÓ) MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CHOCÓ** en los términos expuestos en el llamamiento.

**TERCERO.-** Una vez ejecutoriada la presente providencia, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen para que continúe con el trámite pertinente.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**ÓSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT**  
**Magistrado**